



Consejo Económico y Social

Distr. general
14 de noviembre de 2014
Español
Original: inglés

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

59º período de sesiones

9 a 20 de marzo de 2015

**Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General titulado “La
mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros,
desarrollo y paz para el siglo XXI”**

Declaración presentada por Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.



Declaración

Retos macroeconómicos y estructurales para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing

Veinte años después de su aprobación, la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing sigue planteando problemas. El principal motivo es que su perspectiva macroeconómica aún debe integrarse en los marcos jurídicos, fiscales y programáticos a nivel mundial, regional, nacional y local. Aunque se han realizado progresos a pequeña y mediana escala, especialmente en zonas urbanas, sigue existiendo una brecha entre los géneros. Tras la dificultad para superar las desigualdades, subyace la ausencia de la perspectiva de género en las medidas estructurales, tales como las modificaciones del comercio o de la deuda, o en las consideraciones de los sectores primario y secundario, como es el caso de la energía o la infraestructura. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solo el 2% de la tierra cultivable y el 10% de la moneda en circulación están en manos de mujeres. Es necesaria una voluntad política clara para modificar estas estructuras.

Un elemento que debe tenerse en cuenta en la lógica macroeconómica es la erradicación de la división del trabajo por sexos como el factor fundamental de la desigualdad de género. Las mujeres subvencionan toda la economía soportando la carga del trabajo doméstico no remunerado y de los cuidados que dispensan a la familia. En México, según indica la cuenta nacional satélite más reciente, de 2012, el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados equivalen casi al 22% del producto interno bruto. A pesar de estas cifras, las políticas públicas que perpetúan la división del trabajo por sexos, basada en los estereotipos discriminatorios de hombres y mujeres, aumentan la carga del trabajo doméstico y los cuidados no remunerados asignada a las mujeres. Los problemas mundiales actuales, como el cambio climático, no se abordan con un planteamiento de desarrollo sostenible transformador, y los gobiernos aún conciben a la mujer como el último bastión de la cadena de la resiliencia. Las iniciativas encaminadas a la mitigación —receptoras en estos momentos de al menos el 80% de la financiación dirigida al cambio climático—, en lugar de promover medidas para la inclusión de las mujeres en la gobernanza y el control de las políticas de energía limpia (o en el esquema de una energía de transición), tienen en cuenta a las mujeres únicamente en las medidas encaminadas a mejorar el acceso a la energía. El suministro de cocinas limpias, la medida más habitual citada como “solución para promover la igualdad de género”, es un ejemplo perfecto de cómo las políticas públicas perpetúan la división del trabajo por sexos, creando dependencia y potenciando el trabajo doméstico y el cuidado de la familia no remunerados. Desde esta perspectiva, repartir el trabajo doméstico no remunerado entre el Estado, el sector privado, las comunidades, las familias, los hombres y las mujeres es la clave para erradicar la brecha entre los géneros.

Además, no se ha realizado un esfuerzo sistemático para reducir la concentración de la riqueza y medir sus consecuencias sociales y ambientales. Según un informe de Credit Suisse, el 1% de la población mundial posee casi la mitad de la riqueza (48,2%), mientras que el 50% de la población que queda en la posición inferior reúne menos del 1% de los bienes mundiales. La dimensión de género sigue siendo poco clara, pero empiezan a aflorar algunas cifras. En los

Estados Unidos de América, por ejemplo, de cada ocho multimillonarios, dos son mujeres y, de cada tres mujeres multimillonarias, dos heredaron su riqueza. Junto a lo que se ha denominado la “feminización de la pobreza”, los retos en materia de desigualdad de género en los sectores primario y secundario de la economía parecen infranqueables. Como en el caso del sector energético, no se trata de integrar a las mujeres en modelos de consumo, producción o acumulación insostenibles, sino de llevar a cabo una transición hacia un mundo más sostenible, equitativo y justo.

La división del trabajo por sexos, como medida estructural, está íntimamente ligada a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. La resistencia a garantizar la plena integridad física y la autonomía de las mujeres tiene sus raíces en la división del trabajo por sexos y en la perpetuación de estereotipos sexistas. De un modo evidente, las actividades domésticas y el cuidado de la familia están entrelazados con las medidas de género y salud reproductiva. Por esta razón, con la finalidad de repercutir de forma efectiva en la dimensión macroeconómica con un planteamiento que promueven la igualdad de género, es necesario salvaguardar todos los derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

A la luz de todo lo mencionado anteriormente, ¿cuál es el escenario que se nos plantea? El Grupo de Trabajo Abierto ha propuesto 17 objetivos, con metas y medios de ejecución, para el nuevo programa de medidas de desarrollo sostenible. Entre ellas, la meta 5.4 menciona los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerados, pero, en lugar de abordar el asunto frontalmente, instando a la reducción y la redistribución de este trabajo entre el Estado, el sector privado, las comunidades, las familias, los hombres y las mujeres, únicamente afirma que se deben reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado. Esto significa que, si el texto conservase su lenguaje actual, durante los próximos 15 años no se promovería de forma sistemática y como parte de las estrategias de desarrollo global ningún cambio estructural en el programa de medidas para la igualdad de género. Otra evidencia de los obstáculos a la hora de enfrentarse a los retos macroeconómicos es que los gobiernos han decidido incluir el cumplimiento de las medidas en los marcos nacionales. En ese sentido, si las medidas estuviesen vinculadas a la legislación existente, no existiría la posibilidad de que se produjese un cambio real en el futuro. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing establecieron un paquete de medidas macroeconómicas y ahora nosotros debemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda. La meta 5.4 debería reformularse con el verdadero espíritu de Beijing.

La meta 5.6 discurre así: “Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen”. Es evidente que la meta 5.6 limita el pleno reconocimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva y, supeditándolos a dos acuerdos internacionales, impone restricciones a una interpretación más profunda. Por ello, es fundamental corregir el lenguaje para que se garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, de modo que rece: “Garantizar el acceso universal a los derechos a la salud sexual y reproductiva”.

Otros objetivos deberían formar también parte integrante de un enfoque de género a favor del cambio macroeconómico. Tal es el caso de las metas que hacen referencia al cambio climático, a la infraestructura, a la energía, las desigualdades

dentro de los países y entre ellos, y a la base de los medios de ejecución. Es evidente que la cuestión del género debe incorporarse en cada uno de los objetivos con un planteamiento macroeconómico, pero el reto reside todavía en traducir esta integración para erradicar, por fin, la división del trabajo por sexos. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing constituyen un mandato para los Estados. Su dimensión macroeconómica es fundamental para ejecutar el programa para promover la igualdad de género. Queda claro que, en los próximos años, Beijing y El Cairo sentarán las bases de la agenda para después de 2015, si realmente nos comprometemos a avanzar.
